



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

//nos Aires, 09 de noviembre de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver sobre las solicitudes de suspensión del juicio a prueba, formuladas en la presente causa nro. **CPE 1683/2010/TO1 (2626)** caratulada “**DELPECH, Gustavo Jorge; CAVATORTA, Diego Víctor; FRANCO CHERMIDY, Jadiyi; SILBERGLEIT, Christian Esteban; IMPERIALE, Augusto Bernardo José s/infracción ley 24.769**”, del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, respecto de **Gustavo Jorge DELPECH**, nacido el 6/10/1965, titular del DNI nro. 18.110.905, de nacionalidad argentino, hijo de Jorge Raúl y de Jorgelina GIANCHINO, con la asistencia letrada del Dr. Alejandro Martin BECERRA, T. 89 F153; **Diego Víctor CAVATORTA**, nacido el 4/5/1965, titular del DNI nro. 17.318.660, de nacionalidad argentino, hijo de Mario Luis y María Inés Panadero, con la asistencia letrada del Dr. Agustín Mariano MAYA, T. 100 F. 43; **Jadiyi FRANCO CHERMIDY**, nacida el 20/07/1967, titular del DNI nro. 92.319.845, de nacionalidad paraguaya, hija de Martín Paiba CHERMIDY y Norma FRANCO, con domicilio en Formosa 755, Bernal, Quilmes, Buenos Aires, con la asistencia letrada del Dr. Roberto SCHLAGEL, T.30 F.193; **Christian Esteban SILBERGLEIT**, nacido el 13/12/1972, titular del DNI nro. 23.123.447, de nacionalidad argentino, hijo de Miguel SILBERGLEIT y de Emilia María Fernández, con la asistencia letrada del Dr. H. Gabriel PALMEIRO, T. 89 F.313 y, **Bernardo Jose Augusto IMPERIALE**, nacido el 31/07/1961, titular del DNI nro. 14.874.136, de nacionalidad argentino, hijo de José Nebli



IMPERIALE y de María Victoria Puente, con domicilio en Güemes 595, Río Grande, Tierra del Fuego, con la asistencia letrada del Dr. Pablo Antonio MORET, T.104 F.577. Asimismo, interviene en representación del Ministerio Público Fiscal la Dra. Jesica Iris Pereyra, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Nro. 1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.

RESULTANDO:

I. Que el objeto procesal de la presente causa se encuentra circunscripto en la actualidad, a la presunta evasión al pago del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, por la suma de \$7.336.523,75 mediante la utilización fraudulenta del beneficio de la exención de dicho gravamen de la que gozaba la contribuyente “IMCADE S.A.” en función de la actividad de distribución de diarios, revistas y afines declarada, conforme el requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 2024/2042, de la presente causa.

Dicha conducta fue imputada a **Gustavo Jorge DELPECH** y **Chermidy Jadiyi FRANCO** –en su calidad de responsables de la contribuyente “IMCADE S.A.” (CUIT N° 30-70990582-8) y a **Christian Esteban SILBERGLEIT** y **Augusto Bernardo José IMPERIALE** –en su calidad de administradores de la contribuyente mencionada-, todos ellos en el carácter de coautores (art. 45 del C.P.); mientras que a **Diego Víctor CAVATORTA** haber intervenido –en carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.)- en la comisión de los hechos antes referidos, en beneficio de “IMCADE S.A.”, mediante el depósito de cheques en las cuentas





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

corrientes de la misma –radicadas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Nación Argentina y el HSBC Bank Argentina S.A.- para el posterior retiro de los fondos acreditados.

La conducta descripta fue calificada en orden a las previsiones del art. 2, inc. a) de la ley 24769, conforme la redacción vigente al momento de los hechos.

Ello así, toda vez que por resolución firme de fecha 27 de junio de 2018 este Tribunal resolvió sobreseer a la totalidad de imputados con relación a los hechos consistentes en haber evadido el pago del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, correspondiente a la contribuyente “IMCADE S.A.” (CUIT N°30-70990582-8) relativos a los ejercicios fiscales 2007 y 2009, por las sumas de \$561.027,91 y \$1.399.225,83, respectivamente (art. 336 inc. 3°, 361 del C.P.P.N.; 2° del CP y art. 1 de la ley 27.430); hechos por los cuales también fue requerida la causa a juicio a fs. 2024/2042.

Contra dicha decisión, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación y con fecha 27 de marzo de 2019 la Sala III de la CFCP, resolvió: “*HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el fiscal, SIN COSTAS, CASAR y ANULAR la resolución recurrida y DEVOLVER los actuados a la instancia de origen (arts. 470, 471, 530 y 532 del C.P.P.N.)*”. Luego, la defensa presentó recurso extraordinario federal, que fue concedido en fecha 18 de julio de 2019. Posteriormente, la CSJN en fecha 7 de diciembre de 2021 resolvió declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada por aplicación



mutatis mutandis de las consideraciones vertidas en la causa CPE 601/2016/CS1 “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769. En el precedente citado el máximo tribunal confirmó la aplicación de la ley 27.430 por resultar la ley penal más benigna.

Así, con fecha 27 de abril de 2022, la Sala III de la CFCP resolvió: “*RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el fiscal, sin costas en la instancia (arts. 530 y cctes. del C.P.P.N.).*”.

II. Que, las defensas técnicas de los imputados, peticionaron la suspensión del juicio a prueba de sus asistidos (cfr. escritos incorporados con fechas 17/10/2022, 18/10/2022 y 19/10/2022).

III. Que, celebrada la audiencia del art. 293 del C.P.P.N., la totalidad de imputados ratificaron en primer lugar las presentaciones efectuadas por sus defensas. Así, cedida la palabra al Dr. Alejandro Becerra, Defensor de **Gustavo Jorge DELPECH** expresó que se pronunciaba en nombre de todos los imputados presentes y sus defensas. En ese sentido, ratificó el pedido inconstitucionalidad del mínimo de la pena previsto para la figura de evasión agravada, por considerar que afectaba el principio de igualdad ante la ley y el de inocencia, señalando, además, que ya pasaron 14 años desde que ocurrieron los hechos objeto de estas actuaciones. Además, también solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 76 bis del CP, más allá de que el último párrafo cuestionado no se encontraba vigente para la época de los hechos objeto de este sumario. Con respecto a la reparación del daño, efectuó una propuesta conjunta -que abarca a la totalidad





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

de las partes-, por un monto de pesos cinco millones (\$5.000.000) a pagar en una cuota a la AFIP como presunta damnificada, y para el caso que no acepte la propuesta, se prestó el debido consentimiento para que sea donado a la institución pública que el Tribunal considere pertinente. Con respecto a las tareas comunitarias, solicitó que las mismas se realicen por el menor tiempo posible debido a los problemas cotidianos que deben afrontar los imputados (edad, carga horaria laboral, compromisos familiares) y que se valore asimismo el ofrecimiento de reparación del daño efectuado; todo ello por el tiempo de un año y de ser posible que las mismas se lleven a cabo en la ONG Global Planet of Children sita en la calle Belgrano 687 de esta ciudad. Por todo ello, solicitó la aplicación al caso, del instituto de suspensión de juicio a prueba.

Luego de ello, y consultadas que fueran al resto de las defensas técnicas e imputados, ratificaron en su totalidad lo expresado por el Dr. Becerra.

A su turno, la Sra. Auxiliar Fiscal, señaló en primer lugar que su intervención en el acto tuvo lugar bajo la supervisión/instrucción del Fiscal General, titular de la Fiscalía ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico Nro. 1 –Dr. Marcelo Agüero Vera- (art. 51 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal). En ese sentido, señaló que la Fiscalía iba a realizar un análisis en dos partes a los fines de establecer si se podía consentir la aplicación al caso de la suspensión del juicio a prueba. La primera parte, refería a la viabilidad legal del instituto de la probation al presente caso -art. 26 del CP-, en especial se debía



tener en cuenta, la calificación legal establecida del hecho y los antecedentes de los imputados y si se dan los objetivos propios del instituto de suspensión de juicio a prueba. Superado ese primer análisis se iban a analizar los ofrecimientos concretos efectuados por las partes. En ese sentido, comenzó describiendo que el objeto procesal correspondiente a las presentes actuaciones, resultaba ser la presunta evasión al pago del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en cuenta corriente bancaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2008 por la suma de \$7.336.523,75 mediante la utilización fraudulenta del beneficio de la exención de dicho gravamen de que gozaba la contribuyente Imcade SA, en función de la distribución de diarios revistas y afines declarada. Dicha conducta fue imputada a Gustavo J Delpech y Jadiyi Franco Chermidy, Cristian E. Silbergleit y Augusto Imperiale en calidad de coautores y a Diego V. Cavatorta, como partícipe necesario y calificada bajo las previsiones del art. 2 inc. a) de la ley 24.769. Expresó que dicha normativa legal prevé una pena de tres años y seis meses a nueve años de prisión, siendo éste el primer obstáculo para la concesión del instituto aquí en estudio. Sin perjuicio de ello, las partes han postulado la inconstitucionalidad del mínimo de la escala legal del artículo referido, y en relación a ello, el Ministerio Público, efectuó un doble análisis, señalando en primer lugar que la pena legal establecida “en abstracto” en el art. 2 de la ley 24769 no era inconstitucional, ya que la misma no contraviene normas de orden superior. Ahora bien, para la escala penal prevista en el caso concreto, iban a tener en cuenta las pautas establecidos por los arts.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

40 y 41 del CP, principios de culpabilidad y dignidad humana establecidos por la C.N., ello a fin de consagrar soluciones que no resulten injustas o arbitrarias en el caso. Por ello, el Ministerio Público, entendió en este caso, que conforme lo señaló la CSJN, la proporcionalidad de la pena no debe resolverse como una fórmula matemática, sino debe hacerse un test de racionalidad para determinar que la sanción penal sea proporcionada con el hecho cometido (Fallo CSJN 329/3680 –entre otros-). Que, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, y realizando un análisis profundo de las circunstancias particulares del presente caso (antecedentes jurisprudenciales de los Tribunales Orales del Fuero, tiempo del proceso -14 años-, condiciones personales de los imputados, carencia de antecedentes computables –no han estado nunca privados de su libertad-, la oferta de reparación del daño efectuada a efectos de remediar el daño social que pudieran haber ocasionado y el ofrecimiento a realizar tareas comunitarias), el Ministerio Público Fiscal, consideró que -en el caso en concreto-, asistía razón a las partes y resultaba inconstitucional la pena mínima establecida por el art. 2 inc. a) de la ley 24.769.

Por otro lado, no se expidió respecto del pedido de inconstitucionalidad planteado del art. 76 del CP (ultima parte incorporada por la ley 26735), toda vez que los hechos objeto de estas actuaciones, eran anteriores a la vigencia de la norma aludida, por lo que no resultaba dicha normativa aplicable al caso.

Que, superado el obstáculo referido precedente, manifestó que con relación al ofrecimiento concreto efectuados por las partes



en un total de \$5.000.000, el mismo resultaba razonable de acuerdo a las pautas establecidas por la norma, prestando consentimiento para que sea donado dicho monto a una institución de bien público a elección de los imputados (cfr. informes de AFIP incorporados en autos).

Con respecto, a las tareas comunitarias, el Ministerio Público Fiscal, no tuvo inconveniente en que se realizaran en la institución referida por las partes, por el término de un año y medio por cuatro horas semanales.

Por todo lo expuesto, el Ministerio Público Fiscal prestó conformidad para el otorgamiento de este instituto a los imputados Delpech, Cavatorta, Chermidy, Silbergleit e Imperiale, todo ello en concordancia con los Fallos Acosta y Norverto de la CSJN y las instrucciones generales de la P.G.N.

Luego de ello por Presidencia, se le consultó a los imputados si prestaban consentimiento para donar la suma ofrecida a la ONG Global Planet of Children, a lo que los imputados y sus defensas manifestaron que no tenían objeción alguna.

IV. Por último, cabe destacar que la parte presuntamente damnificada A.F.I.P./D.G.I., si bien se encontraba notificada de la realización de la audiencia y efectuó una presentación con fecha 7/11/2022 en cuanto a que asistiría a la misma, en el marco de la conexión virtual no se presentó ningún representante de dicho organismo.

Y CONSIDERANDO:





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

V. Que, oídas las partes, y prestado el consentimiento para la aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba en autos por parte del Ministerio Público Fiscal, corresponde a esta magistratura verificar que se encuentren reunidas las condiciones legales de admisibilidad de lo solicitado, ello partiendo de que el art. 76 bis del C.P. y el art. 5 del C.P.P.N. establecen que la opinión del Fiscal resulta, en principio vinculante, pero sujeta al control jurisdiccional de logicidad y fundamentación (art. 69 del C.P.P.N.), en base a las facultades que posee en su carácter de titular del ejercicio de la acción pública y al resultar éste un derivado del principio de oportunidad.

Así, tratándose el proceso de una instancia de resolución de conflictos, en la que debe buscarse siempre una mejor y más rápida forma de administración de justicia, se debe verificar que el medio empleado para tal o cual fin sea razonable, proporcionado y conducente para alcanzarlo.

VI. Que, dos son los planteos de inconstitucionalidad formulados en estas actuaciones, uno respecto del mínimo de la pena previsto en el art. 2 inc. a) de la ley 24769 y otro, respecto del art. 19 de la ley 26.735, que modificara el art. 76 bis del C.P.

En ese sentido, en cuanto a las inconstitucionalidades postuladas, cabe señalar que el máximo Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, por resultar que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental gozan de una presunción de



legitimidad que opera plenamente, lo cual obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia; y sólo en los casos en que la repugnancia entre la norma y una cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, debe hacerse lugar a la declaración de inconstitucionalidad. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que está fundado en que cada uno actúe con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (C.S.J.N. Fallos 226:688; 242:73; 285:369; 300: 241,1087; 314:424).

Como consecuencia de ello, a los Tribunales, en principio, les está vedado analizar el acierto o el error de la conveniencia de las medidas adoptadas por el Poder Legislativo en el ejercicio propio de sus atribuciones (confr. C.S.J.N. Fallos 250:410 y 251:21) cuando éstas son ejercidas con respeto a la regla de la razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional, convenios y pactos internacionales sobre Derechos Humanos).

VII.- Ahora bien, en lo concerniente al pedido de inconstitucionalidad del monto mínimo de la pena que en abstracto establece el art. 2, inc. “a” de la ley 24.769, es dable señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “ACOSTA” (N° A. 2186 XLI) y “NORVERTO” (N° N. 326 XLI) recepitó la tesis por la cual se fijara que el instituto de la suspensión de juicio a prueba resultaba aplicable a todos los casos en los cuales podía corresponder una condena de ejecución condicional.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

En el primero de los pronunciamientos citados el máximo Tribunal expuso que para la instrumentación del instituto se contemplan distintos grupos de delitos, siendo uno de éstos el que comprende a aquéllos que “... *previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años de privación de libertad, permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso de acuerdo al art. 26 del Código Penal...*” y manda a interpretar con amplitud el texto legal en la materia, privilegiando aquella “... *que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal...*”.

Lo aludido para la aplicación del instituto, obliga a que en cada caso a resolverse deba verificarse que la pena que puede resultar de una eventual condena no exceda los tres años de prisión, la cual sólo puede estimarse tomando en cuenta la expectativa de sanción según la calificación que recibiera el hecho, el reproche que pudiese corresponder a los aquí imputados, sus circunstancias de realización, el grado de afectación al bien jurídico protegido por la norma sancionatoria, la modalidad de agresión, sin perder de vista las circunstancias personales de los imputados y sus conductas posteriores; siendo que sólo en el caso en concreto puede establecerse una pena proporcional al hecho, tal como lo postulara la Sra. Auxiliar Fiscal en el marco de la audiencia celebrada.

Así, la Sra. Auxiliar Fiscal entendió que si bien el monto mínimo de la escala penal prevista para el delito que aquí se imputa no permitiría que el cumplimiento de la eventual condena sea



dejado en suspenso, lo cierto es que -a su entender- las circunstancias particulares del caso -falta de antecedentes penales de los imputados y demás pautas del art. 26 del C.P.- la conducían a advertir que la hipotética imposición de la pena mínima prevista para el ilícito enrostrado (tres años y seis meses de prisión) resultaría una sanción desproporcionada a la luz del principio de racionalidad y proporcionalidad de las penas.

Al respecto, debe recordarse que el principio acusatorio en que está apoyado nuestro sistema de enjuiciamiento penal obliga al Tribunal a respetar el límite de pretensión punitiva que fijó el Ministerio Público Fiscal y si a ello le sumamos que no existe parte querellante, corresponde atenerse al criterio fundadamente expuesto por el Ministerio Público Fiscal, conforme lo previsto por el art. 69 del C.P.P.N.

Ello, de conformidad con lo expresado en el voto de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni, con relación al principio acusatorio, *“...la función jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria en nuestro modelo de enjuiciamiento penal...”* (conf. Fallo “Amodio, Héctor Luis s/ causa N° 5530).

Sentado ello y superado el control jurisdiccional de logicidad y fundamentación (art. 69 del C.P.P.N.), corresponde señalar que tuve oportunidad de expedirme respecto al planteo de inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal del art. 2 de la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

ley 24769 en el precedente de este Tribunal de fecha 15/5/2018, CPE N° 990000283/2012/TO1.

En dicha oportunidad, sostuve que el legislador, en el marco discrecional de su política criminal, es soberano en la fijación de los tipos penales y las escalas respectivas y su criterio, independientemente de su acierto o de su error, no es susceptible de ser controlado por los jueces a menos que se encuentren en juego una lesión a los derechos fundamentales.

En dicho caso, al igual que el presente objeto de juzgamiento, se debe analizar *“la razonabilidad de la pena, atendiendo a los fines perseguidos por su imposición, en base al impacto del tiempo transcurrido desde la comisión del hecho y la imposición de la pena. Los efectos resocializadores que podría tener esta última (art. 18 C.N.) atento aquel lapso no justificarían la imposición de una pena de cumplimiento efectivo ya que resultaría irrazonable por no adecuarse tal medio a aquellos fines. En efecto, si bien el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho, no resulta violatorio del plazo razonable de juzgamiento, el que por lo demás se computa no desde allí, sino desde la citación a prestar declaración indagatoria, ello no quiere decir que esa circunstancia no genere impacto alguno. Su incidencia se da en los efectos resocializadores de la pena que se ven mermados y por tanto ameritan un reajuste de la pena, no solo en términos cuantitativos sino cualitativos como es al momento de determinar si la pena resulta de cumplimiento efectivo o bien de ejecución condicional. La convergencia de las dos situaciones apuntadas,*



tornan inconstitucional el mínimo de la pena prevista por el art. 2 de tres años y seis meses, al caso concreto”.

Asimismo, y en similitud con dicho precedente, el objeto procesal del caso en concreto cambió ante el sobreseimiento parcial firme dictado oportunamente, en razón de la reforma introducida por la ley 24.730, por lo que el reproche en la actualidad solo puede alcanzar a uno de los tres hechos imputados en el requerimiento de elevación a juicio. De este modo, si bien la presunta lesión subsistente al bien jurídico tutelado por la norma no resulta insignificante, debe valorarse en el presente análisis que la afectación al bien jurídico objeto de actual reproche es sustancialmente inferior a la imputada al momento de elevarse a juicio oral la presente causa.

Por todo lo expuesto, se comparte el criterio sostenido por el MPF en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal prevista por el delito imputado, en el caso concreto (2 inc. a de la ley 24769).

VIII.- Que, con relación al segundo de los planteos expuestos, cabe destacar que la Ley N° 26.735 sancionada el 22 de diciembre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial del día 28 de diciembre de 2011, dispuso en su art. 19 agregar como último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal de la Nación el siguiente: *“Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones”.*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

En este orden, teniendo en cuenta la fecha de los hechos imputados -los cuales datan del año 2008- y que la actual redacción del art. 76 bis del Código Penal privaría a los imputados de acceder a un método de resolución del proceso penal menos riesgoso, que implica evitar la realización del juicio oral y público con la posibilidad del dictado de una sentencia condenatoria y la eventual imposición de una pena privativa de libertad, cobra vigencia en el caso el principio que emana del art. 2 del CP que establece que debe regir aquella ley que resulte más beneficiosa para el imputado, provocando que la limitación establecida por la Ley N° 26.735 no rija en el presente caso.

Por ello, se aplicará el art. 76 bis del CP vigente a la fecha de los hechos, en consecuencia, deviene inoficioso dar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad de esa disposición.

Por lo demás, cabe tener en consideración que la presunta damnificada -DGI-, no se constituyó en el proceso como parte querellante, como así tampoco asistió a la audiencia convocada en autos en los términos del presente instituto, lo que denota el escaso interés que habría tenido el hecho objeto de autos para el titular del bien jurídico presuntamente afectado.

En función de lo expuesto, corresponde considerar razonable en este proceso la procedencia del pedido efectuado como alternativa de solución del conflicto traído a este conocimiento, para el cual la titular de la acción penal prestara su consentimiento luego de un análisis bajo parámetros de objetividad y con motivación suficiente.

Fecha de firma: 09/11/2022

Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDA FORT, SECRETARIO DE JUZGADO



#29522605#348455784#20221109141536172

IX.- Que, sentado ello, en virtud de las características personales de los imputados, la ausencia de antecedentes (atento informes incorporados en la causa) y conforme lo normado por el art. 76 bis del C.P. y el art. 9 inc. a) ley N° 27.307 las solicitudes de suspensión de juicio a prueba formuladas por **Gustavo Jorge DELPECH, Diego Víctor CAVATORTA, Jadiyi FRANCO CHERMIDY, Christian Esteban SILBERGLEIT y, Bernardo José Augusto IMPERIALE** devienen procedentes, resultando adecuado que el tiempo de la misma, en función de la entidad del hecho objeto de la presente, sea fijado en el término de UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES.

X.- Que, en otro orden, cabe analizar los ofrecimientos económicos efectuados por los peticionantes en los términos del tercer párrafo del art. 76 bis. del C.P.

En tal aspecto, el monto ofrecido en concepto de reparación del daño presuntamente ocasionado que en su conjunto alcanza la suma de pesos cinco millones (\$5.000.000) se considera razonable, teniendo en cuenta las constancias acumuladas a lo largo de este proceso, lo manifestado en la audiencia llevada a cabo y demás informes incorporados al expediente.

Atento la posición asumida por la damnificada A.F.I.P./D.G.I., quedando abierta a su respecto la vía civil correspondiente, conf. art. 76 bis tercer párrafo del C.P., y dada la conformidad prestada por los peticionantes se dispondrá como regla de conducta la de donar esa suma ofrecida a la institución





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

Global Planet of Children sita en la calle Belgrano 687 de esta ciudad.

XI.- Que respecto a las tareas comunitarias que el instituto establece, visto lo propuesto por las partes y la conformidad fiscal, considero viable que en el caso los imputados realicen las mismas en dicha institución por el término de la suspensión, por un total de de doscientos ochenta y ocho (288) horas -a razón de cuatro (4) horas semanales-, en días y horarios a convenir con el representante de aquella institución con obligación de acreditar su cumplimiento en los correspondientes legajos a formarse en la Secretaría de Ejecución del Tribunal.

XII.- Que, a su vez, el art. 76 bis del C.P. dispone que “*el Tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del art. 27 bis*”, las cuales deberán ser dispuestas según resulten convenientes en el caso.

Consecuentemente, durante el término antes señalado habrá de imponerse a los imputados **Gustavo Jorge DELPECH, Diego Víctor CAVATORTA, Jadiyi FRANCO CHERMIDY, Christian Esteban SILBERGLEIT y, Bernardo Jose Augusto IMPERIALE** la obligación de notificar al Tribunal de cualquier modificación de su domicilio y someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal.

XIII.- Que, en consecuencia, habiéndose verificado los extremos exigidos por el art. 76 bis del Código Penal, corresponde hacer lugar a las solicitudes de suspensión del juicio a prueba formuladas respecto de **Gustavo Jorge DELPECH, Diego Víctor**



CAVATORTA, Jadiyi FRANCO CHERMIDY, Christian Esteban SILBERGLEIT y, Bernardo José Augusto IMPERIALE, la que será fijada por el término indicado de **UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES**.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

I.- DECLARAR la inconstitucionalidad en el caso en concreto del mínimo de la escala penal prevista por el art. 2 inc. a de la ley 24769.

II.- HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA en la presente causa CPE **1683/2010/TO1 (2626)** solicitada por **Gustavo Jorge DELPECH**, por el término de **UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES** (arts. 76 bis y 76 ter del C.P.).

III.- IMPONER al nombrado las siguientes pautas a cumplir durante el término mencionado en el punto precedente (art. 27 bis del C.P.):

a) notificar al Tribunal de cualquier modificación del domicilio;

b) someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal;

c) realizar tareas comunitarias en la institución Global Planet of Children sita en la calle Belgrano 687 de esta ciudad, por el término de la suspensión, por un total de doscientos ochenta y ocho (288) horas –a razón de cuatro (4) horas semanales-, en días y horarios a convenir con el representante de aquella institución con





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

obligación de acreditar su cumplimiento en los correspondientes legajos a formarse en la Secretaría de Ejecución del Tribunal.

IV.- HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA en la presente causa CPE **1683/2010/TO1 (2626)** solicitada por **Diego Víctor CAVATORTA**, por el término de **UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES** (arts. 76 bis y 76 ter del C.P.).

V.- IMPONER al nombrado las siguientes pautas a cumplir durante el término mencionado en el punto precedente (art. 27 bis del C.P.):

a) notificar al Tribunal de cualquier modificación del domicilio;

b) someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal;

c) realizar tareas comunitarias en la institución Global Planet of Children sita en la calle Belgrano 687 de esta ciudad, por el término de la suspensión, por un total de doscientos ochenta y ocho (288) horas –a razón de cuatro (4) horas semanales-, en días y horarios a convenir con el representante de aquella institución con obligación de acreditar su cumplimiento en los correspondientes legajos a formarse en la Secretaría de Ejecución del Tribunal.

VI.- HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA en la presente causa CPE **1683/2010/TO1 (2626)** solicitada por **Jadiyi FRANCO CHERMIDY**, por el término de **UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES** (arts. 76 bis y 76 ter del C.P.).



VII.- IMPONER a la nombrada las siguientes pautas a cumplir durante el término mencionado en el punto precedente (art. 27 bis del C.P.):

a) notificar al Tribunal de cualquier modificación del domicilio;

b) someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal;

c) realizar tareas comunitarias en la institución Global Planet of Children sita en la calle Belgrano 687 de esta ciudad, por el término de la suspensión, por un total de doscientos ochenta y ocho (288) horas –a razón de cuatro (4) horas semanales-, en días y horarios a convenir con el representante de aquella institución con obligación de acreditar su cumplimiento en los correspondientes legajos a formarse en la Secretaría de Ejecución del Tribunal.

VIII.- HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA en la presente causa CPE 1683/2010/TO1 (2626) solicitada por **Christian Esteban SILBERGLEIT**, por el término de **UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES** (arts. 76 bis y 76 ter del C.P.).

IX.- IMPONER al nombrado las siguientes pautas a cumplir durante el término mencionado en el punto precedente (art. 27 bis del C.P.):

a) notificar al Tribunal de cualquier modificación del domicilio;

b) someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal;





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

c) realizar tareas comunitarias en la institución Global Planet of Children sita en la calle Belgrano 687 de esta ciudad, por el término de la suspensión, por un total de doscientos ochenta y ocho (288) horas –a razón de cuatro (4) horas semanales-, en días y horarios a convenir con el representante de aquella institución con obligación de acreditar su cumplimiento en los correspondientes legajos a formarse en la Secretaría de Ejecución del Tribunal.

X.- HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA en la presente causa CPE 1683/2010/TO1 (2626) solicitada por **Bernardo Jose Augusto IMPERIALE**, por el término de **UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES** (arts. 76 bis y 76 ter del C.P.).

XI.- IMPONER al nombrado las siguientes pautas a cumplir durante el término mencionado en el punto precedente (art. 27 bis del C.P.):

a) notificar al Tribunal de cualquier modificación del domicilio;

b) someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal;

c) realizar tareas comunitarias en la institución Global Planet of Children sita en la calle Belgrano 687 de esta ciudad, por el término de la suspensión, por un total de doscientos ochenta y ocho (288) horas –a razón de cuatro (4) horas semanales-, en días y horarios a convenir con el representante de aquella institución con obligación de acreditar su cumplimiento en los correspondientes legajos a formarse en la Secretaría de Ejecución del Tribunal.



XII.- DECLARAR RAZONABLE la suma conjunta ofrecida por la totalidad de imputados de pesos cinco millones (\$5.000.000) en concepto de reparación del daño presuntamente ocasionado y, **DONAR** la misma a la institución Global Planet of Children sita en la calle Belgrano 687 de esta ciudad, debiendo acreditar en autos su cumplimiento, una vez firme el presente resolutorio.

XIII.- DECLARAR ABSTRACTO el planteo de inconstitucionalidad introducido en las presentes actuaciones (art. 76 bis del C.P., último párrafo introducido por el art. 19 de la ley 26.735).

XIV.- HACER SABER a los imputados que dentro del quinto día de que la presente resolución quede firme, deberán ponerse a disposición de la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal para cumplir con lo impuesto, bajo apercibimiento de revocar en caso de incumplimiento el beneficio concedido e inmediatamente llevar a cabo el juicio respectivo (art. 76 ter del C.P.).

XV.- COMUNICAR lo aquí resuelto al Registro Nacional de Reincidencia, a la AFIP-DGI y a la Policía Federal Argentina.

XVI.- SIN COSTAS (art. 530 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese mediante cédulas electrónicas y cúmplase.

LUIS ALBERTO IMAS
JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

Fecha de firma: 09/11/2022

Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDA FORT, SECRETARIO DE JUZGADO



#29522605#348455784#20221109141536172



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 1683/2010/TO1

FERNANDA FORT
SECRETARIO DE JUZGADO

Fecha de firma: 09/11/2022

Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDA FORT, SECRETARIO DE JUZGADO



#29522605#348455784#20221109141536172